



Informe de las ONGs sobre la situación en RDC.
OCTUBRE de 2009

**Demasiadas pérdidas, resultados insuficientes:
El impacto de las operaciones anti-FDLR sobre los civiles en el Este de la
RDC y lo que la UE debería hacer.**

En junio de 2009, las ONGs que trabajan en la República Democrática del Congo (RDC) han elaborado un informe de situación sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a las necesidades urgentes de protección y de asistencia en el Este del país. El documento subrayaba el impacto humanitario dramático de las operaciones militares llevadas a cabo por el ejército congoleño (las FARDC), con el apoyo de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Naciones Unidas (MONUC), para desarmar por la fuerza a las milicias FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda) ; hacía un llamamiento a la UE, entre otros, para que insistiera ante el gobierno congoleño para que tomara medidas concretas con el fin de minimizar el impacto negativo de las operaciones militares sobre los civiles.

Cuatro meses más tarde, las estadísticas demuestran un aumento de las amenazas hacia los civiles, entre ellas la destrucción de casas y de bienes, los desplazamientos forzados, las violencias sexuales y los asesinatos. Las ONGs y las agencias de las Naciones Unidas que trabajan en el Este del Congo sufren también ataques de modo creciente, que amenazan al espacio humanitario para dar la ayuda indispensable para la supervivencia de miles de personas.

Las organizaciones firmantes de este informe están pues convencidas de que el precio pagado por los civiles es demasiado elevado en comparación con los modestos resultados de la estrategia militar actual, y exhortan a la Unión Europea a dirigir sus esfuerzos hacia una nueva estrategia que proteja a los civiles y ponga fin al conflicto que afecta a la RDC desde hace más de diez años.

La situación humanitaria es ahora mucho peor que antes de las operaciones

Las dos operaciones militares (Umoja y Kimia II) han producido un cierto impacto sobre el debilitamiento de las FDLR, pero la milicia es todavía operativa y tiene la capacidad de infligir grandes sufrimientos a los civiles. A pesar de los éxitos limitados de la operación en curso, la protección de los civiles no ha sido mejorada; al contrario, ha empeorado en numerosos lugares.

El número de civiles asesinados, víctimas de violencias sexuales o desplazados forzosos, ha aumentado desde el último informe de situación de las ONGs, hace cuatro meses. En el conjunto del territorio, el número de personas desplazadas en la RDC se estima en más de 2,2 millones¹. En junio, las Naciones Unidas estimaban que más de 400.000 personas se habían desplazado en Kivu Norte y Sur desde enero de 2009², como consecuencia de los enfrentamientos o por ataques de represalia de las FDLR. Cuatro meses más tarde, el número total de personas desplazadas debido a operaciones militares se estima en más de 900.000³. Es evidente que las operaciones no solamente han fracasado en ralentizar el flujo de los desplazamientos, sino que ha aumentado en muchos casos; solo en Kivu Sur, se estima en 167.250⁴ las personas desplazadas en solo tres meses, entre junio y agosto de 2009. Las operaciones militares han conducido hasta el presente a la destrucción de más de 6000 hogares.

La violación continúa practicándose regularmente en las zonas de intervención de Kimia II, designando los informes a las FARDC como los principales autores de estos actos en un cierto número de estas zonas.

Se estima que las operaciones, en conjunto, han estado asociadas a 7.000⁵ casos informados de violaciones. Mientras que las mujeres y las niñas han sido las más afectadas, los hombres, los chicos y los niños jóvenes han sido objeto igualmente de estas violencias. El FNUAP ha informado de 2.584 casos de violaciones en Kivu Sur de enero a junio de 2009. Las cifras comunicadas en octubre por OCHA para el mismo periodo sugieren un número de casos bastante más importante: 5.387 violaciones cometidas en Kivu Sur durante los seis primeros meses de 2009⁶, de las cuales un 90% (es decir 4.848 casos) se suponen cometidas por las partes en conflicto. Esto representa 4 veces el número de violaciones censadas para el mismo periodo de 2008, antes del comienzo de la operación militar.

Además de la destrucción de hogares y bienes, de desplazamientos y de violencia sexual, los combates en el Este del Congo han conducido a la muerte al menos a 1.193 civiles⁷.

¹ OCHA - Ituri 184,432 ; Haut Uélé 232,735 Bas Uélé 31,296; South Kivu 704,130; North Kivu 1.083,518

² Consejo de Seguridad de la ONU, 29º informe del Secretario General sobre la MONUC, 18 de Septiembre de 2009

³ Estadísticas de OCHA, de junio a agosto de 2009.

⁴ Comisión de movimiento de población de Kivu Sur, Estadísticas de movimiento de población para el Kivu Sur, 10 de septiembre de 2009.

⁵ 4.658 nuevos casos han sido registrados por la FNUAP en Norte y sur Kivu entre enero y junio de 2009. Las estadísticas no han finalizado todavía para el periodo que va de julio a mediados de octubre, pero los informes preliminares indican que el número de casos informados para este periodo es proporcionalmente del mismo orden. En el Kivu Sur, 2.584 nuevos casos han sido registrados en la primera mitad de 2009, en comparación con los 2.883 casos registrados para la totalidad del año 2008.

⁶ OCHA, informe de la reunión RDC del 20 de octubre de 2009.

⁷ Human Rights Watch, con ayuda de informaciones suplementarias provenientes de informes internos de la MONUC y de fuentes locales fiables, había contabilizado 1.143 muertes entre enero y el comienzo de octubre de 2009. Human Rights Watch ha tenido conocimiento de 476 muertes suplementarias, que están por confirmar. Además de los muertos informados por HRW, el Informador especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales Philip Alston ha informado del asesinato de 50 civiles por las FARDC en abril.

El coste de Kimia II para los civiles

En el mismo periodo, se atribuye a las operaciones militares la repatriación de 1.071 combatientes de las FDLR, según las cifras de Naciones Unidas. A la luz de estas estadísticas, se concreta en 1 civil asesinado, 7 civiles violados y 900 civiles desplazados forzosos para cada combatiente de la FDLR desarmado con éxito.

La rápida integración de los combatientes rebeldes en las FARDC ha contribuido igualmente a la degradación de la situación humanitaria. Los milicianos que habían cometido abusos sexuales u otras violaciones de los Derechos Humanos no han sido excluidos de la integración y actúan ahora bajo el uniforme de las FARDC, ahora bien las estadísticas demuestran numerosos casos de violencia sexual en las zonas de despliegue de las unidades de las FARDC integradas de nuevo. Además, estas unidades de las FARDC han entrado a menudo en conflicto con otras unidades de las FARDC – especialmente en las zonas en las que el acceso a los recursos mineros está en juego – los civiles se encuentran demasiado a menudo entre las dos.

Una presión evidente sobre los retornos de Goma

Se ha hecho mucho ruido alrededor del amplio movimiento de retorno de las personas desplazadas en los campos alrededor de Goma hacia sus regiones de origen, este proceso se ha saludado como un signo de una mayor seguridad y de estabilidad. Mientras que el retorno voluntario de personas desplazadas es positivo, hay numerosas indicaciones según las cuales han tenido lugar igualmente retornos efectuados bajo presión ilegal y excesiva. Ciertos factores muy incitadores o disuasivos pueden haber contribuido a la decisión de retorno de las personas desplazadas, tales como la reducción o el cese de la ayuda alimentaria en los campos, los mensajes oficiales de entidades políticas – a la vez locales y nacionales – a favor del retorno de las personas desplazadas, y las sugerencias según las cuales las tierras abandonadas serían redistribuidas si nadie las reclamaba.

En un momento en que muchos en el seno de la comunidad internacional y del gobierno congoleño saludan el cierre de los campos de Goma, es importante recordar que 2,2 millones de personas permanecen desplazadas en la RDC, en familias de acogida con medios de subsistencia insuficientes, en campos de acceso todavía más restringido, o en zonas completamente inaccesibles. Además, sin una paz duradera, hay pocas garantías de que los retornados a su zona de origen no sean desplazados de nuevo ya que el conflicto continúa amenazando la vida de las poblaciones en el Este de la RDC.

La inseguridad impide a las personas vulnerables el recibir ayuda

A este cuadro se añaden las amenazas crecientes en contra del espacio humanitario. Durante los seis primeros meses de 2009, 107 incidentes de seguridad en contra de trabajadores humanitarios se han producido en los 2 Kivus, de los cuales un 83% en la provincia de Kivu Norte⁸, es decir un aumento del 70% en relación con el mismo periodo

⁸ OCHA, Acceso humanitario en las provincias de Kivu Norte y Sur, incidentes de seguridad contra los humanitarios de enero a agosto de 2009.

del año anterior en esta provincia⁹. En el Este de la RDC, los incidentes son imputables principalmente a las FARDC, a la Policía Nacional congoleña y a los grupos armados.

Fuentes de la ONU indican que los soldados de las FARDC son responsables de cerca de un tercio de los 41 ataques informados sobre objetivos humanitarios en el segundo trimestre del año (abril –junio de 2009).

Más de 900.000 personas desplazadas, es decir un 80% de las personas desplazadas en Kivu Norte, residen en las zonas en las que las Naciones Unidas requieren una escolta militar¹⁰. Las ONGs, con mayor presencia en el terreno de las Naciones Unidas, han sido víctimas del 86% de los ataques a los trabajadores humanitarios en Kivu Norte de enero de 2008 a junio de 2009¹¹.

Recomendaciones de las ONGs a la Unión Europea

El acercamiento entre la RDC y Ruanda ha sido saludado en el seno de la comunidad internacional, siendo el acercamiento regional, en efecto, un componente necesario para una paz duradera en los Grandes Lagos. Las ofensivas militares han sido descritas a menudo como necesarias para la consolidación de este acercamiento, pero los beneficios para los civiles son rarísimos. Al contrario, las operaciones militares han tenido consecuencias humanitarias desastrosas, convirtiendo las condiciones de vida de millares de civiles inocentes mucho más difíciles que antes del comienzo de las operaciones. No solamente los civiles han sido cruce de disparos de estas operaciones, sino que también han sido tomados como objeto numerosas veces; en los dos casos, el precio pagado por los civiles es muy elevado en comparación con los modestos éxitos de la estrategia militar actual. La Unión Europea está bien situada para realizar esfuerzos hacia una nueva estrategia que tenga como fin la protección de los civiles y, a más largo plazo, poner fin al conflicto que afecta a la RDC desde hace más de diez años.

Garantizar la protección de los civiles como componente de una estrategia revisada para combatir a las FDLR

1. La UE y sus Estados miembros deberían reconocer públicamente que las operaciones militares conjuntas actuales contra las FDLR han causado sufrimientos inaceptables a los civiles. Deberían insistir ante los gobiernos de la RDC y de Ruanda, así como ante la MONUC, para que se comprometan a un acercamiento global y multidireccional de desarme de las FDLR que se concentre sobre todo en estrategias no militares y ponga énfasis en la protección de los civiles.

Esto incluiría el arresto de los individuos buscados por genocidio y otros crímenes graves más recientes, entre ellos los dirigentes de las FDLR radicados en Europa, y la apertura de procesos judiciales contra ellos, así como una reforma del programa de desarme y de desmovilización.

⁹ OCHA, Incidentes de seguridad contra humanitarios, Kivu norte, agosto de 2009.

¹⁰ OCHA, Incidentes de seguridad contra humanitarios, Kivu norte, agosto de 2009.

¹¹ OCHA, Incidentes de seguridad contra humanitarios, Kivu norte, agosto de 2009.

2. La UE y sus Estados miembros – en particular Francia, Reino Unido y Austria en tanto que miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones – deberían asegurarse de que la MONUC de una prioridad real a las estrategias DDRRR¹² no-militares, y que trabaje con los gobiernos de la RDC y de Ruanda para determinar la puesta en marcha de una serie concertada de medidas DDRRR no militares para garantizar el desarme de un máximo de milicianos combatientes. El gobierno congoleño y la MONUC deberían hacer más esfuerzos y ofrecer más recursos para favorecer la repatriación voluntaria de los combatientes de la FDLR y de sus próximos.

Debería hacer disponible una mayor información en cuanto a las propuestas realizadas en materia de DDRRR. Las bases DDRRR deberían estar situadas en los lugares en que los civiles no sean amenazados.

Las FARDC deberían dar garantías sólidas en cuanto a la seguridad de los FDLR que deseen entregarse, y cesar inmediatamente los ataques contra las operaciones DDRRR de extracción de combatientes rebeldes. Los esfuerzos suplementarios recientes de apoyo al proceso de DDRRR – especialmente por parte del Reino Unido – son bienvenidos y debería mantenerse un refuerzo tal de recursos tanto tiempo como sea necesario.

3. Los Estados miembros de la UE que acogen a los dirigentes de las FDLR – Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia – deberían actuar en el marco de su legislación nacional para limitar la capacidad de los dirigentes políticos de las FDLR de incitar a la violencia.

Especialmente, cuando sea posible con las leyes en vigor de sus países, estos Estados deberían investigar y perseguir a estos responsables por complicidad de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad cometidos en el Este del Congo.

Apoyar una reforma global del sector de seguridad tomando en consideración las violaciones de los Derechos Humanos

4. La UE y sus Estados miembros deberían asegurarse de que la formación y el desarrollo institucional emprendidos – por la MONUC así como a través de iniciativas bilaterales de Estados miembros de la UE – en el marco de una reforma coordinada del ejército, estén condicionados por el respeto del derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos por las FARDC y apoyen a las FARDC en la protección de los civiles frente a las milicias rebeldes de manera conforme al derecho internacional. La UE y sus Estados miembros deberían apoyar al gobierno de la RDC en esta puesta en marcha condicionando todo apoyo bilateral a las unidades individuales al respeto efectivo de los derechos humanos y a la aplicación de una justicia militar eficaz en la toma en cuenta de las violaciones de estos derechos.

5. La UE y sus Estados miembros deberían garantizar la puesta en marcha de la resolución 1888 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las violencias sexuales. En cuanto a esto, deberían alabar la política de tolerancia cero anunciada por el gobierno de la RDC en julio de 2009 relativa a las violaciones del derecho internacional

¹² Proceso de desarme, desmovilización, repatriación, reintegración y reinstalación.

humanitario y de los Derechos Humanos cometidas por el personal militar, y exhortar a su aplicación estricta. La UE debería alentar al gobierno congoleño para que garantice que cada caso de violación informado sea tratado y que cada autor sea considerado responsable y llevado ante la justicia. Además, la UE debería, con el gobierno congoleño, examinar el papel que la misión europea encargada de la reforma del sector de la seguridad en la RDC (EUSEC) podría jugar en la puesta en marcha de mecanismos transparentes de control de las investigaciones individuales tomando en cuenta todas las violaciones del derecho humanitario internacional y para garantizar que la acción militar no sea dirigida por los oficiales a los que se atribuyen las violaciones de los Derechos Humanos.

6. La UE debería aumentar la coordinación y la coherencia de sus acciones y asegurarse de que las actividades de los actores bilaterales no se entorpezcan mutuamente, especialmente a través del establecimiento de normas comunes en materia de formación y de transparencia en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de reforma del sistema de seguridad. La UE debe seguir comprometida en el proceso a largo plazo que pretenda la garantía de la aplicación de la justicia y el respeto de los Derechos Humanos en la RDC; con este objetivo, debería otorgar a la misión EUSEC el mandato y los recursos apropiados para la realización de una reforma significativa del sector de la seguridad.

7. La UE y sus Estados miembros deberían asegurarse de que la misión europea EUPOL posee los recursos financieros y humanos suficientes para permitirle aumentar su despliegue en el Este del país. En especial, EUPOL debe disponer del suficiente personal civil – en especial en los ámbitos de los derechos humanos y de la igualdad de género – para permitirle apoyar a la Policía nacional congoleña en la institución de políticas relativas a los Derechos Humanos y al género.